



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: . Anexos: No.  
Radicación #: 2017EE154267 Proc #: 3805547 Fecha: 11-08-2017  
Tercero: 5658447-1 – MARIN SEGUNDO ALEXANDER "MUEBLES Y  
ARTESANIAS LAURITA"  
Dep Radicadora: DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL Clase Doc: Externo  
Tipo Doc: Citación Notificación

## RESOLUCION N. 01888

### “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

#### LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades delegadas por la Resolución No. 1037 del 28 de julio de 2016 de la Secretaría Distrital de Ambiente, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto Distrital 175 del 4 de mayo de 2009, en cumplimiento de la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, la Ley 1333 de 21 de julio 2009, el Decreto 948 de 5 de junio de 1995 hoy compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, la Resolución 6910 de 2010 emanada de la Secretaría Distrital de Ambiente del Bogotá D.C., el Decreto Ley 2811 de 18 de diciembre de 1974, la Resolución 627 de 7 de abril de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Código Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984, y Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 y,

### CONSIDERANDO

#### I. ANTECEDENTES

Que la Secretaría Distrital de Ambiente, en uso de las funciones conferidas por el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, por medio de las cuales le corresponde ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales en el Distrito Capital de Bogotá, y atendiendo el radicado No. 2011IE55746 del 17 de mayo de 2011, realizó visita técnica el 03 de agosto de 2011 al establecimiento denominado **MUEBLES Y ARTESANÍAS LAURITA**, ubicado en la carrera 86 C Bis No. 42 – 63 sur de la Localidad de Kennedy de esta ciudad.

#### II. CONSIDERACIONES TECNICAS

Que de la visita en comento, la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Dirección de Control Ambiental de esta Entidad, emitió el Concepto Técnico No. 00794 del 20 de enero de 2012, el cual concluyó lo siguiente:

(...)

#### 1. ANÁLISIS AMBIENTAL



De acuerdo con la visita realizada el día 03 de Agosto de 2011; teniendo como fundamento el registro fotográfico y el acta de visita firmada por el propietario, se estableció que aún no se han adelantado obras ni adecuaciones en la empresa, la emisión sonora continua superando los parámetros de ruido permitidos hacia las zonas aledañas.

Con fundamento en la reglamentación de usos del suelo, la actividad se encuentra incluida dentro de la ficha técnica para el sector, pero con las siguientes condiciones:

- Según condiciones que establezca el departamento Administrativo de Planeación Distrital de conformidad con requisitos ambientales del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente.
- En la misma estructura de la vivienda, sin sobrepasar el primer piso ni 60 m2 de construcción.
- Sobre vía vehicular.

Con base en los resultados de las mediciones de ruido efectuadas, se determinó que la industria **MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA**, continua **Incumpliendo** los parámetros de emisión de ruido permitidos por la Resolución 627 del 07 de Abril de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, donde se obtuvo un registro de Nivel **Leqemisión de 76.41dBA**, valor que supera los parámetros máximos establecidos en la norma, en horario diurno para un uso de suelo **RESIDENCIAL**.

## 2. CONCEPTO TÉCNICO

### 2.1. Cumplimiento Normativo según uso del suelo del predio generador y del sector receptor afectado.

De acuerdo con los datos de ruido consignados en la tabla de resultados, generados por la actividad desarrollada por la industria **MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA** y de conformidad con los parámetros de emisión establecidos en la Resolución 627 del 07 de Abril 2006 del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Artículo 9, Tabla No. 1, donde se estipula que para un uso de suelo **RESIDENCIAL**, los valores máximos permisibles son de 65 dB(A) en el horario diurno y 55 dB(A) en el horario nocturno, se conceptuó que el generador de la emisión continua **INCUMPLIENDO** con los niveles máximos permisibles aceptados por la norma en horario diurno.

## 6. CONCLUSIONES:

- a) Según los resultados de la evaluación sonora, los niveles sonoros **INCUMPLEN** actualmente con los valores de referencia normativa, establecidos en la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial "Artículo 9°. Estándares máximos permisibles de emisión de ruido. En la Tabla 1" para un **Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado**.



- b) Se corroboró que continua generando afectaciones a los residentes aledaños y no atendió las recomendaciones de la visita técnica efectuada en el 2007 y 2009 que dieron como resultado los Conceptos Técnicos No. 2970 del 28-03-2007 y C.T. 1116 del 19-01-2010, en los que se le hicieron las observaciones relacionadas con el ruido generado por actividades productivas de la industria.
- c) No dio cumplimiento a los requerimientos generados de los Conceptos Técnicos No 2970 del 28-03-2007 y 1116 del 19-01-2010, y se observó un reiterado incumplimiento a la norma; por lo anterior, el presente Concepto Técnico se traslada al Grupo de Apoyo Jurídico y Normativo de la Subdirección de Calidad del Aire, auditiva y Visual, para que se adelanten las acciones a que haya lugar.

(...)"

Que mediante Auto No. 01395 del 05 de marzo de 2014, expedido por la Dirección de Control Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), inicio trámite Administrativo Ambiental de carácter Sancionatorio en contra del señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLOREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.658.447, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA** registrado con matrícula mercantil 0001819144 del 16 de julio de 2008, ubicado en carrera 86 C Bis No. 42 - 63 sur, de la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C.

Que el Auto No. 01395 del 05 de marzo de 2014, fue notificado personalmente al Señor **SEGUNDO ALEXANDER MARIN FLOREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.658.447, el día 24 de Noviembre de 2014, publicado en el Boletín Legal de la Secretaria Distrital de Ambiente el día 10 de abril de 2015, con termino de ejecutoria del 25 de noviembre de 2014.

### III. DEL PLIEGO DE CARGOS

Que a través del Auto No. 04227 del 23 de octubre de 2015, la Secretaria Distrital de Ambiente, Formuló Pliego de Cargos en contra del señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA** registrado con matrícula mercantil 0001819144 del 16 de julio de 2008, ubicado en carrera 86 C Bis No. 42 – 63, sur, de la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C., por los siguientes cargos:

“(.....)”

**Cargo Primero:** Superar presuntamente los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en una zona residencial tranquilidad y ruido moderado en un horario diurno, generados por el uso de una (1) ventilador, una (1) pulidora, una (1) planeadora, una (1) sinfín, una (1) lijadora de banda, una (1) sierra circular, un (1) compresor y herramientas manuales, contraviniendo lo normado en la Tabla No. 1 del Artículo 9° de la Resolución 0627 de 2006.



**Cargo Segundo:** Presuntamente generar ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas, y no emplear los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles de ruido no perturbaran las zonas aledañas habitadas según lo establecido en los Artículos 45 y 51 del Decreto 948 de 1995.

(.....)”

Que el Auto No. 04227 del 23 de octubre de 2015, fue notificado por edicto al Señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447, el día 05 de enero de 2016, previa citación efectuada mediante Radicado No. 2015EE226845 del 13 de noviembre de 2015, para notificación personal, Teniendo en cuenta lo anterior, el precitado Acto quedó ejecutoriado el día 06 de enero de 2016, según constancia de ejecutoria que obra en el expediente.

Que, dentro del término legal establecido, **NO** fue presentado por parte del señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA** registrado con matrícula mercantil 0001819144 del 16 de julio de 2008, ubicado en carrera 86 C Bis No. 42 - 63 sur, de la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C., escrito de descargos **NI** solicitudes probatorias, tal cual lo dispone el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

Que posteriormente y habiéndose vencido el término de traslado y descorrído del mismo se expidió el Auto No. 01495 del 17 de agosto de 2016, mediante el cual se dispuso abrir a pruebas el respectivo trámite administrativo de carácter ambiental decretándose y teniéndose como tal “*todos los documentos que obran en el expediente SDA-08-2012-2005, correspondiente al establecimiento de comercio denominado MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA, que sean pertinentes, necesarios y conducentes al esclarecimiento de los hechos.*”

El Auto No. 01495 del 17 de agosto de 2016, fue Notificado Personalmente al señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447, el día 23 de noviembre del año 2016, quedando debidamente ejecutoriado el 24 de noviembre de 2016.

#### IV. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en cuanto otorga a los entes públicos responsables del control ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro Estado social de derecho.



De la misma forma, existen en nuestro ordenamiento unas normas reguladoras ambientales que conducen a la aplicación de medidas preventivas y sancionatorias, por el incumplimiento a las regulaciones establecidas sobre la protección del ambiente y el manejo de los recursos naturales renovables en nuestro país.

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que la Constitución Nacional contiene derechos y deberes de los ciudadanos frente a la sostenibilidad de un ambiente sano, en el artículo 79 encontramos que *“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”* y en el artículo 80 ordena al Estado que *“...deberá prevenir y controlar factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir reparación de los daños causados”*. Es por esto que las autoridades ambientales están en la obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano a los ciudadanos, y hacer cumplir las disposiciones con el fin de que esto no sea vulnerado.

Que, a su vez el artículo 80 de la Constitución Política, preceptúa que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, en el inciso 2 del mencionado artículo, se refiere a los instrumentos represivos y establece la obligación por parte del estado para *“imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”*. Es por esto que las autoridades ambientales están en la obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano a los ciudadanos y hacer cumplir las disposiciones con el fin de que este no sea vulnerado.

Que igualmente, el ordenamiento constitucional señala en su artículo 95, que toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las Leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral octavo el de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Consecuentes con la política pública de protección del ambiente y el contenido y alcance de las regulaciones existentes en materia de protección ambiental y manejo de los recursos naturales en nuestro país, es imprescindible actuar dentro del marco de las finalidades de la función administrativa de la autoridad ambiental, a efectos de propender por el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, para velar porque se asegure el establecimiento y la operación de controles adecuados y eficaces respecto a los factores de deterioro ambiental, teniendo de presente que el desarrollo económico no se convierta en una amenaza a la preservación de los recursos naturales renovables.

#### **Régimen procesal aplicable al presente caso:**

En el presente caso es menester recordar que el régimen sancionador, se encuentra sujeto a los

5



principios constitucionales de legalidad, tipicidad y reserva de ley, principios rectores del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

Al respecto, en relación con la norma procesal aplicable, encontramos que la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 “*Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”, en su artículo 308, consagró el régimen de transición y vigencia de la siguiente manera:

**“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia.** *El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.*

*Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.*

**Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior...** (Subrayas y negritas insertadas).

Dicho Código (CPACA) entró en vigencia a partir del 2 de julio de 2012, ordenando su aplicación a todos los procesos, demandas, trámites, procedimientos o actuaciones administrativas que se inicien con posterioridad a dicha fecha, estableciendo a su vez, que los que estuvieran en curso al momento de entrar a regir, seguirían tramitándose conforme al régimen jurídico anterior.

En consecuencia, debe precisarse en este caso, que pese a haber sido invocada la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los Actos Administrativos de este proceso sancionatorio ambiental, a saber, el Auto de Inicio No. 01395 del 05 de marzo de 2014, el Auto de Pliego de Cargos No. 04227 del 23 de octubre de 2015 y el Auto de Pruebas No. 01495 del 17 de agosto de 2016, los cuales permiten evidenciar que las reglas adoptadas por la Ley 1437 de 2011 (CPACA), guardan armonía en la eficacia que debe tener las actividades del Estado en la protección y realización de los derechos de los administrados y en la consecución del bien común, paradigmas acogidos en la finalidad del artículo 1, en los principios del artículo 3, derechos y deberes tanto de las personas como de las autoridades (artículos 6 al 10) y en las reglas de procedimiento de las actuaciones de las autoridades en ejercicio de su función administrativa, en las que el derecho a una decisión pronta, a la defensa y a la seguridad jurídica de los derechos adquiridos encuentra en esta Ley especial protección y garantía procesal; sin embargo, la evidencia de la fecha de Visita Técnica de Seguimiento y Control Ruido nos aclara que se realizó el 3 de agosto de 2011 y siendo esto así, resulta evidente que la norma de procedimiento administrativo aplicable, corresponde al Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, por lo tanto, es la que se aplicará en el presente Acto Administrativo, y se aplicará en adelante dentro del presente Proceso Sancionatorio.

Que el Decreto 948 de 1995 actualmente compilado en el Decreto 1076 de 2015, consagra en su artículo 14 hoy compilado en el artículo 2.2.5.1. 2.12. **NORMA DE EMISIÓN DE RUIDO Y NORMA DE RUIDO AMBIENTAL.** *El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fijara*



*mediante resolución los estándares máximos permisibles de emisión de ruido ambiental, para todo el territorio nacional. Dichos estándares determinaron los niveles admisibles de presión sonora, para cada uno de los sectores clasificados en la presente sección, y establecerán los horarios permitidos, teniendo en cuenta los requerimientos de salud de la población expuesta.*

*Las normas o estándares de ruido de que trata este artículo se fijaran para evitar efectos nocivos que alteren la salud de la población, afecten el equilibrio de ecosistemas, perturben la paz pública o lesionen el derecho de las personas a disfrutar tranquilamente de los bienes de uso público y del medio ambiente.*

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Que el párrafo del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, señala: “*en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales*”.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo 3, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.

Que, a su vez el artículo 5 de la misma ley, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

## V. ANALISIS PROBATORIO Y DECISION

Con el objeto de abordar la discusión Jurídica en el sub examine de cara a los hechos, los cargos formulados a través del Auto No. 04227 del 23 de octubre de 2015, las pruebas obrantes en el informativo, así como la normativa y Jurisprudencia que respalda el tratamiento Jurídico de la Administración de los Recursos Naturales conviene analizar el alcance de las disposiciones Normativas cuya Infracción se le atribuye al señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447, por lo que conviene ahondar en el juicio de responsabilidad en materia sancionatoria ambiental, en torno a la imputación efectuada por transgresión de las normas sobre protección ambiental, en materia de emisión de ruido



específicamente lo establecido en el artículo 45 del Decreto 948 de 1995, y tabla 1 del artículo 9 de la Resolución 627 de 2006.

Con base en lo anterior, se procederá a analizar la situación fáctica del señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447, frente a los cargos imputados de la siguiente manera:

**Cargo Primero:** *Superar presuntamente los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en una zona residencial tranquilidad y ruido moderado en un horario diurno, generados por el uso de un (1) ventilador, una (1) pulidora, una (1) planeadora, una (1) sinfín, una (1) lijadora de banda, una (1) sierra circular, un (1) compresor y herramientas manuales, contraviniendo lo normado en la Tabla No. 1 del Artículo 9° de la Resolución 0627 de 2006.*

### El artículo 9 de la Resolución 627 de 2006 establece lo siguiente:

**“Artículo 9.-** *Estándares máximos permisibles de emisión de ruido.* En la Tabla 1 de la presente resolución se establecen los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles ponderados A (dB(A))

A través del concepto Técnico No. 00794 del 20 de enero del 2012, se logró determinar que el establecimiento de comercio denominado **MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA** registrado con matrícula mercantil 0001819144, estaba generando un registro de Nivel **leq<sub>emision</sub>** de **76.41Db(A)**, lo cual se verificó a través de la prueba de sonometría practicada por Funcionarios de la Secretaría, niveles de ruido éstos que superan los 65 dB(A) máximo permisible de nivel de emisión de ruido en horario Diurno, según lo dispone el artículo 9 de la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006 del MAVDT actualmente de Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta que el establecimiento se encuentra ubicado en el sector B, considerado como Tranquilidad y Ruido Moderado.

Que identificado plenamente el sector en donde está ubicado el establecimiento de comercio denominado **MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA**, dentro de la tabla 1 de clasificación de que trata la Resolución No. 0627 del 2006, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se localiza en un sector B, que corresponde a. TRANQUILIDAD Y RUIDO MODERADO, para una zona de uso RESIDENCIAL (R), Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes, Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e investigación, parques en zonas urbanas diferentes a los parques mecánicos al aire libre, sujetos a los niveles de emisión de ruido máximos permisibles en el día 65dB(A) y en la noche de 55dB(A), y como resultado de la visita practicada por esta autoridad ambiental, el establecimiento está generando ruido por encima de los estándares máximos permisibles de emisión de ruido señalados en el artículo 9 de la resolución mencionada **76.41 dB(A)** en horario Diurno correspondiente a la tabla 1 del artículo 9 de la Resolución 627 de 2006, superando en **11.41 dB(A)**, lo que lo clasifica como de aporte contaminante muy alto.



En virtud de lo anterior, y con base en el informe Técnico que antecede, se arriba a la conclusión de que el señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447, es responsable de la infracción de la mencionada normativa como quiera que se encuentra demostrado que mediante el empleo de fuentes generadoras de ruido como son un (1) ventilador, una (1) pulidora, una (1) planeadora, un (1) sinfín, una (1) lijadora de banda, una (1) sierra circular, un (1) compresor y una (1) herramienta manual, los cuales se encontraban operando en su establecimiento de comercio, superaron el máximo permitido por el artículo 9 de la Resolución 627 de 2006, en una zona residencial para un sector B tranquilidad y ruido moderado, por lo cual el cargo primero formulado en el artículo primero del auto 04227 del 23 de octubre de 2015, está llamado a prosperar.

Con respecto al segundo cargo, artículo 45 del Decreto 948 de 1995, el cual establece lo siguiente:

*“Artículo 45°. - Prohibición de generación de ruido. Prohíbese la generación de ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas.”*

De acuerdo al material probatorio obrante dentro del expediente y lo evidenciado en la visita de seguimiento y control, realizada por funcionarios de la Secretaria se puede establecer que para la fecha de la visita técnica del 3 de agosto de 2011 practicada con el fin de realizar la medición de los decibeles generados en el establecimiento de comercio denominado **MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA**, los niveles de presión sonora producidos por dicho establecimiento sobrepasan los límites establecidos en la Resolución 627 de 2006, al sobrepasar dichos límites permitidos por la Ley para emisión de ruido, por parte del establecimiento de comercio denominado **MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA**, se vulnero lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 948 de 1995, al generar ruido que traspaso los estándares permisibles de presión sonora, para la fecha en que se realizó a través de la prueba de sonometría la respectiva medición de los decibeles generados en el mismo y que corresponden al día en que se efectuó la visita Técnica de fecha 03 de agosto de 2011.

En este orden de ideas, es claro que los ruidos se generan en el establecimiento de comercio denominado **MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA**, y son producidos por elementos que están bajo el cuidado y responsabilidad del propietario del establecimiento del señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, y por ende tiene bajo su obligación el no permitir que se emita sonidos que traspasen los límites de una propiedad, y que superen el máximo permitido que lo hace responsable por infringir la norma en comento.

Por lo cual el segundo cargo formulado mediante auto No. 04227 del 23 de octubre de 2015, respecto al artículo 45 del decreto 948 de 1995, está llamado a prosperar.



Con respecto, al artículo 51 del Decreto 948 de 1995, formulado en el auto No. 04227 del 23 de octubre de 2015, el cual consagra lo siguiente.

**Artículo 51.** - *Obligación de Impedir Perturbación por Ruido. Los responsables de fuentes de emisión de ruido que pueda afectar el medio ambiente o la salud humana, deberán emplear los sistemas de control necesarios, para garantizar que los niveles de ruido no perturben las zonas aledañas habitadas, conforme a los niveles fijados por las normas que al efecto establezca el Ministerio del Medio Ambiente.*"

Con respecto al artículo 51, cargo formulado en el Auto No. 0427 del 23 de octubre de 2015, no está llamado a prosperar por cuanto La clasificación del uso del suelo donde se encuentra ubicado el establecimiento de comercio, denominado **MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA**, es de uso **RESIDENCIAL** con actividad económica en la vivienda, esto constatado con la información registrada mediante el Concepto Técnico No. 00794 del 20 de enero de 2012, numeral 4 (CLASIFICACION DEL USO DEL SUELO DEL PREDIO GENERADOR)., por cuanto al caso de la referencia, no se puede solicitar que se emplee sistemas de control para garantizar que los niveles de ruido no perturben las zonas aledañas habitadas, ya que esta medida solo es aplicable a Usos de suelo de carácter comercial.

Respecto al artículo 51 del Decreto 948 de 1995, formulado en el cargo segundo del auto No. 04227 del 23 de octubre de 2015, este no está llamado a prosperar por las consideraciones anteriormente descritas.

Que descendiendo al caso sub examine, con fundamento en la precitada norma, es claro que el responsable del incumplimiento de las normas ambientales en materia de ruido es el señor **SEGUNDI ALEXANDER MARIN FLOREZ** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 5.658.447, por haber incurrido en la infracción de las siguientes normas: artículo 9 de la tabla 1 de la Resolución 627 de 2006, y el artículo 45 del Decreto 948 de 1995.

Que así las cosas, en el expediente SDA-08-2012-2005, obran suficientes pruebas documentales y técnicas que dan cuenta de la responsabilidad del señor **ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447, por el incumplimiento de la normativa ambiental, específicamente el artículo 45 del Decreto 948 de 1995, en concordancia con el artículo 9 de la tabla 1 de la Resolución 627 de 2006, conforme a los cargos Primero, y segundo, atribuidos al infractor mediante el Auto No. 04227 del 23 de octubre de 2015, puesto que se concluyó que el generador de la emisión **INCUMPLE** con los niveles máximos permisibles aceptados por la norma, en el Horario Diurno para una Zona de Uso Residencial, pruebas que valga decir, no fueron tachadas de falsas, lo cual confirma su legalidad, y se constituyen como documentos útiles e idóneos para acreditar la responsabilidad frente a la infracción ambiental cometida.



Que teniendo en cuenta el análisis anterior considera esta Autoridad Ambiental que en el presente caso, los cargos Primero, y segundo respecto al artículo 45 del Decreto 948 de 1995, atribuidos al infractor mediante el Auto No. 04227 del 23 de octubre de 2015, **prosperaron**.

Tal y como lo señala la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias, la actividad comercial de las empresas debe enmarcarse en los rangos que determine la ley, al punto que se proteja la salud y el medio ambiente. Veamos:

*“Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que **el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación.** (Negritas fuera del texto)*

*El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.*

*Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en el campo de sus actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos al ambiente.*

*La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad.*

*No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que su primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de retribución ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar”. (Sentencia C-254 de 1.993, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell)”*



Que, con relación a la prueba documental, el tratadista Carlos Betancur Jaramillo en su obra Derecho Procesal Administrativo resalta lo siguiente:

(...)

*“...Es de trascendental importancia dentro del proceso, por ser la forma documentada la que predomina en la esfera administrativa. En ésta se desenvuelve una actividad que genera, como dice Bielsa, una documentación propia, ya que ella es casi siempre formal, escrita o actuada. Esta documentación está ínsita en toda la actividad administrativa. De allí que no se refiera sólo a los actos administrativos ni a los distintos pasos previos que deberán cumplirse para su expedición, sino también a todas las gestiones que cumple la administración en el ejercicio de su actividad. Así, tienen forma escrita, por regla general, los oficios, los conceptos, los requerimientos, las puestas en mora, las instrucciones de servicio, las circulares, los informes técnicos, etc....”*

Que sumado a lo anterior, tal y como lo señala la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias, la exposición a las emisiones atmosféricas y la actividad comercial de las empresas debe enmarcarse en los rangos que determine la ley, al punto que se proteja la salud y el medio ambiente. Veamos:

*“Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. (subrayado fuera del texto)*

*El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.*

*Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en el campo de sus actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos al ambiente.*



Que, en este orden de ideas, para esta Autoridad queda claro que el señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA** registrado con matrícula mercantil 0001819144 del 16 de julio de 2008, ubicado en la carrera 86 C Bis No. 42 - 63 sur, de la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C., infringió los derechos colectivos de los ciudadanos y la normativa ambiental vigente, de acuerdo con el incumplimiento del artículo 45 del Decreto 948 de 1995, en concordancia con el artículo 9 de la tabla 1 de la Resolución 627 de 2006, conforme a los Cargos Formulados mediante el Auto No. 04227 del 23 de octubre de 2015.

Que, respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, según el cual la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "...dentro de los límites del bien común...".

Que adicionalmente la Corte Constitucional en Sentencia, T- 536 del 23 de septiembre de 1992, determinó:

*"...Para esta Corte, entonces, no cabe duda que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho constitucional fundamental, pues su violación atenta directamente contra la perpetuación de la especie humana y, en consecuencia, con el derecho más fundamental del hombre: la vida. El derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales porque son esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al medio ambiente que le rodea y que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse económica y socialmente a los pueblos, garantizándoles su supervivencia..."*

Se considera pertinente en este momento hacer referencia a algunos criterios adicionales de la Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia T - 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:

*"La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.*

*"Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros)."*



Así mismo, a través de la Sentencia T - 453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero señala:

*“El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo.”*

De acuerdo a esta interpretación que hace la Corte Constitucional, todas las personas son responsables del cuidado y conservación de los recursos naturales, tomando conciencia que no se debe agotar o menoscabar la base en que se sustentan, evitando el deterioro del medio ambiente, teniendo en cuenta que no solo es un derecho disfrutar del ambiente sano consagrado en la Constitución Nacional, sino que también es un deber de todos protegerlo y propender por la calidad de vida y bienestar social de las futuras generaciones para la satisfacción de sus propias necesidades, principio por el cual se da cumplimiento al concepto de desarrollo sostenible, consagrado en la Ley 99 de 1993. Así mismo hace parte de este precepto, el cumplimiento de las obligaciones y deberes con relación a las autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental con respecto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Que, en conclusión, es obligación de esta Secretaría Distrital de Ambiente por mandato superior, en ejercicio de la gestión asignada, mediante el cumplimiento de las funciones fijadas legalmente y en el ámbito de su competencia hacer efectivos los mandatos constitucionales y legales dentro del marco del estado de derecho y el desarrollo sostenible.

Que en consideración a los preceptos Constitucionales y Legales esta Secretaría ha dado cabal cumplimiento al debido proceso dentro del proceso sancionatorio iniciado y las decisiones tomadas tienen su fundamento legal, habiéndose cumplido los procedimientos legales instaurados en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009 y en las demás normas aplicables al caso, preservando las garantías que protegen al señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447 quien no desvirtuó los cargos formulados, por lo cual la autoridad ambiental, está en la obligación de imponer la sanción respectiva.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta autoridad Ambiental considera que el señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA** registrado con matrícula mercantil 0001819144 del 16 de julio de 2008, ubicado en la carrera 86 C Bis No. 42 - 63 sur, de la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C., infringió el artículo 45 del Decreto 948 de 1995 en concordancia con el artículo 9 de la tabla 1 de la Resolución 627 de 2006, razón por la cual esta Secretaría procederá a Declararlo



Responsable Ambientalmente a la Persona Natural en mención, del Cargo Primero y Segundo respecto al artículo 45 del Decreto 948 de 1995, a Título de Dolo de los cargos Formulados mediante el Auto No. 04227 del 23 de octubre del 2015 y procederá a imponer una sanción, como a continuación se describe:

## V. DE LA SANCIÓN A IMPONER

Las disposiciones y decisiones administrativas emanadas de las distintas autoridades ambientales son de obligatorio cumplimiento para sus destinatarios, por lo que su desconocimiento, total o parcial, acarrea la imposición de las sanciones legales vigentes.

Las normas que gobiernan la actividad de la Administración Pública en materia de medio ambiente tienen como función primordial la prevención y como finalidad la de brindar a las autoridades la posibilidad de asegurar la protección, integridad y aprovechamiento sostenible de todos y cada uno de los recursos naturales renovables. En tal sentido, cuando éstas son transgredidas, la función de prevención debe dar paso a la sancionatoria que surge justo en el momento en que se advierta su desconocimiento. En otras palabras, cuando un particular desconoce una norma o un acto administrativo de carácter ambiental, su conducta trae como consecuencia una sanción, que aun cuando no está encaminada a minimizar los efectos nocivos generados sobre el medio ambiente, pretende castigar a quien con su conducta ha causado perjuicio a los recursos naturales cuya preservación y protección está reservada a la Secretaria.

Que son sujetos de la imposición de medidas sancionatorias quienes se les encuentren demostrado que por acción u omisión lesionen las disposiciones ambientales, razón por el cual el infractor se hace acreedor de las sanciones previstas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

El artículo 40 de la ley 1333 de 2009, señala el tipo de sanciones a imponer al infractor de normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables; igualmente precisa en su parágrafo primero, que la imposición de multas no exime al infractor de la ejecución de las obras o medidas ordenadas por la autoridad ambiental responsable del control, ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales renovables afectados; igualmente prevé que las sanciones establecidas en el citado artículo serán aplicables sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar. Lo anterior, en armonía con el artículo 31 de la Ley 1333 de 2009.

***“ARTICULO 40.- Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de***



*Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:*

*1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

*(...)"*

Por su parte, a través del Decreto 3678 del 04 de octubre de 2010, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dio cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 2° del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, por lo que definió los criterios que deben atender las autoridades ambientales para la imposición de las sanciones allí previstas.

Una vez agotado el trámite procesal dispuesto en la Ley 1333 de 2009 y advertida la procedencia de sanción respecto del señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA** registrado con matrícula mercantil 0001819144 del 16 de julio de 2008, ubicado en la Carrera 86 C Bis No. 42 - 63 Sur, de la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C., la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente emitió el Concepto Técnico de Criterios No. 00659 del 23 de abril de 2017, que desarrolló los criterios para la imposición de la **Sanción Principal de MULTA**, acorde con los criterios establecidos en el artículo 4 del Decreto 3678 de 2010, el cual dispone:

**Artículo 4°.- Multas.** *Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, y con base en los siguientes criterios:*

*B: Beneficio ilícito*

*α: Factor de temporalidad*

*i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo*

*A: Circunstancias agravantes y atenuantes*

*Ca: Costos asociados*

*Cs: Capacidad socioeconómica del infractor*

*Donde:*

**Beneficio ilícito:** Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Este beneficio puede estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos.



El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la infracción con la probabilidad de ser detectado.

**Factor de temporalidad:** Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el tiempo.

En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción, se considerará dicha infracción como un hecho instantáneo.

**Grado de afectación ambiental:** Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia de la alteración producida y de sus efectos.

Se obtiene a partir de la valoración de la intensidad, la extensión, la persistencia, la recuperabilidad y la reversibilidad de la afectación ambiental, las cuales determinarán la importancia de la misma.

**Evaluación del riesgo:** Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales.

**Circunstancias atenuantes y agravantes:** Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

**Costos asociados:** La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009.

**Capacidad socioeconómica del infractor:** Es el conjunto de cualidades y condiciones de una persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria.”



En cumplimiento de la prenotada normativa, a través del Informe Técnico No. 00659 del 23 de abril de 2017, complementado este por el Informe Técnico No. 01277 del 21 de julio de 2017, se desarrollaron cualitativa y cuantitativamente los criterios expuestos, de conformidad con la metodología para la tasación de multas prevista en el artículo 4 de la Resolución 2086 de 2010 emana del MAVDT, el cual prevén su “Artículo 4.- Multas.”

En el cual, para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán tomar como referencia los criterios contenidos en el artículo 4 de la presente Resolución y la aplicación de la siguiente modelación matemática:

$$Multa = B + [(a * R) * (1 + A) + Ca] * Cs$$

A continuación, se dará aplicación a la modelación matemática prevista en el artículo 4 de la Resolución MAVDT 2086 de 2010, de cara a los criterios para la imposición de la sanción principal de **MULTA** desarrollados para el presente caso respecto del señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447, a través del Informe Técnico No. 00659 del 23 de abril de 2017, complementado este por el Informe Técnico No. 01277 del 21 de julio de 2017, así:

### Informe Técnico No. 00659, 23 de abril del 2017

(.....)

#### 3.2 Multa

*Definidas todas las variables y factores se proceden al cálculo de la multa:*

$$Multa = B + [(\alpha * r) * (1 + A) + Ca] * Cs$$

$$Multa \text{ cargo segundo} = \$0 + [(1 * \$ 65.096.148) * (1 + 0,2) + 0] * 0.04$$

**Multa cargo segundo = \$ 3.124.615 Tres millones ciento veinticuatro mil seiscientos quince Pesos M/cte**

### Informe Técnico No. 01277, 21 de julio del 2017 (Complementa informe Técnico No. 00659, 23 de abril del 2017)

(.....)”

*Dando alcance al Informe Técnico de Criterios No. 00659 de fecha 23 de abril de 2017, mediante el cual se estableció el cálculo de multa, solo para el segundo cargo formulado en el Auto No.*



04227 de fecha 23 de octubre de 2015, es necesario adicionar al informe de la referencia, el cargo primero: **“Superar presuntamente los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en una zona Residencial de Tranquilidad y Ruido Moderado en un horario diurno, generados por el uso de un (1) ventilador, una (1) pulidora, una (1) planeadora, una (1) sinfín, una (1) lijadora de banda, una (1) sierra circular, un (1) compresor y herramientas manuales, contraviniendo lo normado en la tabla No. 1 del artículo noveno de resolución 627 de 2006”**, toda vez que analizado por el grupo técnico y jurídico de la Dirección de Control Ambiental, se determinó que este prospera.

El cálculo de la multa realizado en el Informe Técnico de Criterios No. 00659 de fecha 23 de abril de 2017, no se ve afectado por la adición de este cargo, ya que los cargos hacen referencia a la misma conducta, justificada en el artículo 45 del Decreto 948 de 1995 determinando la prohibición de generar ruido que traspase los límites de una propiedad, en concordancia con la tabla 1 del artículo 9 de la Resolución 627 de 2006 que establece los parámetro de presión sonora, los horarios fijados (decibeles de emisión de ruido), las zonas de uso del suelo y sectores respectivos.

(...)

Que así las cosas, resulta procedente imponer al señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447, la Sanción de Multa en cuantía equivalente a **TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$3.124.615)**. Los cuales deberán ingresar al patrimonio de esta Entidad.

Que la sanción a imponer mediante la presente Resolución **NO** Exonera al señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447, de cumplir con las acciones y obligaciones ordenadas por esta entidad, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.

Que de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos administrativos expedidos por las autoridades ambientales que impongan sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva.

## VI. CONSIDERACIONES FINALES

Que el inciso 3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, determina que las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar al Procurador Judicial Ambiental y Agrario los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales; razón por la cual en la parte resolutive del presente acto administrativo se ordenara la expedición de los oficios correspondientes para tal efecto.

Que por otro lado, una vez en firme el presente acto administrativo, la Secretaria deberá efectuar el reporte respectivo al Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, del Ministerio de



Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009.

## VII. COMPETENCIA DE LA SECRETARIA

Que el artículo 101 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el Honorable Concejo de Bogotá, dispuso transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente en la Secretaría Distrital de Ambiente, como un organismo del Sector Central, con autonomía administrativa y financiera.

Que el artículo 5 del Decreto 109 de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la competencia para ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

Que el artículo ibídem en su literal i) asigna a esta Secretaría la competencia para ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto 175 del 4 de mayo de 2009, por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.

Que de conformidad con lo contemplado en el numeral 2 del artículo 1 de la Resolución 1037 del 28 de julio de 2016, el Secretario Distrital de Ambiente, delega en el Director de Control Ambiental, la función de expedir los actos administrativos que decidan de fondo los procesos sancionatorios.

Que, en mérito de lo expuesto, El Director de Control Ambiental;

## RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR** Responsable a Título de **DOLO** al señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **MUEBLES Y ARTESANIAS LAURITA** registrado con matrícula mercantil 0001819144 del 16 de julio de 2008, ubicado en carrera 86 C Bis No. 42 - 63 sur, de la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C., por infringir el artículo 45 del Decreto 948 de 1995 y la tabla 1 del artículo 9 de la Resolución 627 de

20



2006, de acuerdo con los Cargos Formulados mediante el Auto No. 04227 de 23 de octubre de 2015, consistente en generar ruido que traspasó los límites de una propiedad en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - Como consecuencia de lo anterior, imponer al señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447, la **SANCIÓN de MULTA por TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$3.124.615).**

**PARÁGRAFO PRIMERO.** - La multa anteriormente fijada, se deberá cancelar en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, a órdenes de la Secretaria Distrital de Ambiente (Fondo de Financiación del Plan de Gestión Ambiental), Concepto M – 05-550 otros, en la Tesorería Distrital, Ventanilla Número 2, ubicada en el Supercade de la Carrera 30 con Calle 26 y previo diligenciamiento del formato para el Recaudo de Conceptos Varios, disponible en la Sede de la Entidad, ubicada en la Carrera 14 No. 54 - 38. Una vez efectuado el pago se deberá a llegar a esta Secretaría, copia del recibo expedido con destino al expediente **SDA-08-2012-2005**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** - Si el citado obligado al pago de la multa, no diera cumplimiento a lo ordenado, dicha multa presta merito ejecutivo y, por tanto, se hará efectiva por medio del procedimiento de jurisdicción coactiva, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009.

**PARÁGRAFO TERCERO.** – Al momento de la notificación, se hará entrega al sancionado de copia simple de los informes Técnicos de Criterios Nos. 00659 del 23 de abril de 2017, complementado este por el Informe Técnico No. 01277 del 21 de julio de 2017, los cuales únicamente liquidan y motivan la imposición de la sanción de Multa, en cumplimiento del artículo 3 del Decreto 3678 de 2010 y hace parte integral del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO TERCERO.** - Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447, en la Avenida Carrera 86 C Bis No. 42 – 63 Sur de la ciudad de Bogotá D.C., según lo establecido en los artículos 43, 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

**PARÁGRAFO.** - El señor **SEGUNDO ALEXANDER MARÍN FLÓREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 5.658.447, deberá presentar al momento de la notificación, documento idóneo que lo acredite como tal.

**ARTÍCULO CUARTO.** - Comunicar la presente Resolución a la Subdirección Financiera de la Dirección de Gestión Corporativa de esta Secretaria para lo de su competencia.



**ARTÍCULO QUINTO.** - Comunicar al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios el presente acto administrativo, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo señalado en el memorando 005 del 14 de marzo de 2013 emitido por el mismo ente de control enunciado y su instructivo.

**ARTÍCULO SEXTO.** - Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal que para el efecto disponga esta Secretaría. Lo anterior en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.** - Reportar la presente Sanción una vez se encuentre ejecutoriada, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encargado del **RUIA**, de conformidad con lo establecido en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley 1333 de 2009.

**ARTÍCULO OCTAVO.** - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer personalmente o por intermedio de apoderado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación con el lleno de los requisitos legales conforme a lo dispuesto en el artículo 50, 51, 52, y 53 del Código Contencioso Administrativo

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**  
**Dado en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de agosto del año 2017**

**OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA**  
**DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL**

**Elaboró:**

CAROLINA RIVERA DAZA	C.C: 52482176	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 20170196 DE 2017	FECHA EJECUCION:	01/08/2017
CAROLINA RIVERA DAZA	C.C: 52482176	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 20170196 DE 2017	FECHA EJECUCION:	04/08/2017

**Revisó:**

AMPARO TORNEROS TORRES	C.C: 51608483	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 20170849 DE 2017	FECHA EJECUCION:	04/08/2017
------------------------	---------------	----------	--------------------------------------	---------------------	------------

**Aprobó:**  
**Firmó:**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA    C.C.: 11189486    T.P.: N/A    CPS: FUNCIONARIO    FECHA EJECUCION: 11/08/2017